

POLÍTICA

INTRODUCCIÓN

El año de 2002 representó un difícil reto para la integración latinoamericana y caribeña. Los efectos de la desaceleración mundial, ligada al mal desempeño de la economía estadounidense, se manifestaron en un deterioro de los indicadores sociales y una contracción del comercio intrarregional en la mayoría de los esquemas latinoamericanos. Situación que aumentó las presiones internas y se tradujo en estallidos sociales en diversos países, siendo particularmente importantes por sus consecuencias los paros realizados en Venezuela, las movilizaciones en Argentina, las revueltas de los cocaleros de Bolivia, así como las protestas en Perú y Ecuador, entre otras. Lo que obligó a varios países a centrar sus mayores esfuerzos en aliviar las tensiones y contradicciones internas, antes que abordar con mayor prioridad los procesos de integración. Esto limitó, en gran medida, los avances de estos procesos a las áreas institucional y de infraestructura, dejando pendiente una integración multidimensional, más profunda y significativa.

Por otra parte, el año de 2002 consolidó los cambios en la política exterior de Estados Unidos, iniciados con la administración Bush y acelerados y profundizados por los trágicos eventos del 11 de septiembre del 2001. El bajo perfil con que inició la administración actual encontró en la amenaza terrorista a su seguridad nacional la excusa perfecta para alinear una serie de transformaciones a nivel internacional, interamericano y bilateral bajo el factor militar. La premisa estadounidense de colocar a la seguridad como factor catalizador de las relaciones de poder, alejó las visiones estadounidense y latinoamericana al punto de confrontarlas en el seno del Consejo de Seguridad, además, dotó a la política estadounidense de un trasfondo de seguridad energética que también permeó las distintas políticas de cooperación. Así, el camino andado por el proceso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), así como las conquistas en el seno de la OEA como el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), la carta democrática y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se vieron al menos cuestionados.

Y es que, por una parte, en respuesta a la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que reconoce la importancia de fortalecer la seguridad económica a través del desarrollo del comercio y la inversión,

el Congreso estadounidense autorizó las facultades especiales de negociación al presidente Bush a través de la *Trade Promotion Authority* (TPA) (Autoridad para la Promoción del Comercio), lo que incidió en un proceso de negociación multilateral selectivo por parte de la potencia del Norte hacia América Latina, como alternativa al lento avance del proceso del ALCA.

Del otro lado, la instauración del MEM en el seno de la OEA, como mecanismo alternativo a la certificación unilateral estadounidense de la lucha antidrogas, tuvo claroscuros, pues los países latinoamericanos excluidos de manera indefinida de este proceso son aquellos que formalizaron instrumentos de cooperación de mayor envergadura como el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y la Alianza México-Estados Unidos en la lucha contra las drogas, mientras que países como Guatemala o Haití aun sufrieron los embates del cuestionamiento y la desaprobación mediante el mecanismo de la certificación estadounidense.

A su vez, la carta democrática de la OEA, signada mientras caían las torres gemelas, pasa a ser un mito desde su misma concepción, pues las presiones ejercidas sobre los países latinoamericanos en torno a sus posturas frente al tema de Iraq, la coerción sobre Colombia para aceptar los términos de la cooperación antidrogas-antiguerrilla-antiterrorismo, así como el chantaje para establecer acuerdos bilaterales de renuncia al derecho de establecer juicios contra ciudadanos estadounidenses en la Corte Penal Internacional o las restricciones a sus mismos ciudadanos con la autorización para que éstos puedan ser espiados y la aprobación de la "guerra preventiva", son muestras flagrantes de antidemocracia y de violación a las libertades fundamentales establecidas como derechos humanos. Esta serie de ajustes en la política interamericana se desarrollaron de manera transversal a las negociaciones en marcha sobre el ALCA y los demás esquemas regionales. Por todo esto, la presente compilación sobre la dimensión política de la integración latinoamericana durante el 2002 representa un esfuerzo de perspectivas múltiples por plantear esta serie de procesos que afectan, impulsan, condicionan y sustentan los diferentes proyectos de integración tanto regional como continental y extrarregional en que participa América Latina, pero desde una perspectiva más allá de la simple institucionalidad, que recoja esa gran riqueza del otro gran eje que está incidiendo de forma cada vez más importante en los rumbos de la integración latinoamericana: el de los procesos de la sociedad civil organizada frente a las propuestas hegemónicas.